

augurada en las declaraciones oficiales, pero no suficientemente clara para las expectativas empresariales.

El presupuesto de 1972, programado con un déficit inicial de 16.000 millones de pesetas (cubierto mediante la emisión de Deuda Pública), pretendía servir a la expansión aumentando el gasto de inversión pública y apoyando la inversión privada. El presupuesto para 1973 es equilibrado. Presupone que la reactivación está conseguida, y simplemente "la acompaña". El gasto público se aumenta en 54.953 millones de pesetas respecto al período precedente (el 13,3 por 100, en términos relativos).

¿Acompañará este presupuesto a la nueva fase expansiva de la economía española? ¿El equili-

brío presupuestario será compatible a su vez con la estabilidad? Nos ayudarán a responder a estas preguntas unas breves puntualizaciones sobre la importancia de la actividad del Estado y las actitudes de los empresarios en el contexto del capitalismo español.

La beligerancia del Estado

Quizá sea reiterativo destacar el creciente papel que el Estado juega con las economías capitalistas. Como puede comprobarse en el cuadro, la participación de los ingresos del Estado, en porcentaje sobre el producto nacional bruto, ha pasado de ser el 11,6 por 100, en 1961, al 15,2 por 100 para 1973.

más abundantes los recursos de que dispone el Estado, por lo que su despilfarro o empleo socialmente improductivo perjudica en mayor grado a la colectividad, y, por otro lado, debido a la menor rentabilidad de las sucesivas inversiones, cuando se ha adquirido un determinado grado de crecimiento económico.

La beligerancia de los empresarios

Respecto a las presiones del sector privado, hay que notar que la clase empresarial española, celosa de la seguridad de los negocios, siguiendo prácticas aprendidas en los invernaderos autárquicos, necesita ver muy claras sus expectativas para comprometerse en la reactivación.

La acción presupuestaria no basta normalmente. El mecanismo más expeditivo y eficaz —y, por supuesto, cómodo— es la inflación: los precios que de una forma creciente e incontrolada atentan contra la capacidad adquisitiva del consumidor.

La OCDE —organismo siempre apostillado como "poco sospecho-

so"— culpa de esta situación estacionaria a la herencia de la situación al principio de la década, cuando precios y beneficios eran elevados. En 1969-70, el "beneficio corriente de la industria todavía constituía el 50 por 100 del valor añadido", porcentaje alto "si se compara, por ejemplo, con el 37 por 100 en Italia".

¿Cabe inferir, después de estas consideraciones, que el presupuesto acompañará simplemente a la marcha de la economía? El ministro de Hacienda, en sus declaraciones ante los medios de difusión, informaba que el crecimiento del 13 por 100 del presupuesto corresponde, en un 7 al 7,5 por 100, al del PNB en términos reales. La diferencia hasta el 13 por 100 es atribuible a la subida de precios. ¿Cómo compaginar estas previsiones con las estimaciones del III Plan, que fijan en el 3,7 por 100 anual el tope máximo de incremento de los precios? Todo parece indicar que las tensiones inflacionistas, más acentuadas en los últimos meses, continuarán al margen de las previsiones del III Plan y de la apariencia equilibradora y estabilizadora del presupuesto para 1973. ■ LAZARO MUÑOZ.

RELACION PNB-PRESUPUESTO DEL ESTADO

Año	PNB (A) (Miles de millones)	PRESUPUESTO (B) (Miles de millones)	% (B)/(A)
1961	706,6	81,9	11,6
1962	816,7	97	11,9
1963	963,9	106,5	11
1964	1.088	127,9	11,8
1965	1.287	155,7	12,1
1966	1.477	187,3	12,7
1967	1.632,2	217,3	13,3
1968	1.804,9	238,8	13,2
1969	2.010,6	283,1	14,1
1970	2.258	328,6	14,6
1971	2.530 (1)	370,2	14,6
1972	2.808 (1)	419,3	14,9
1973	3.117 (1)	474,3	15,2

(1) Previsiones del III Plan de Desarrollo.

Fuente: Ministerio de Hacienda, Banco de España.

Esta tendencia creciente ha alarmado a ciertos órganos de opinión, que han declarado que el intento de frenar dicha tendencia debe ser "aplaudido como una actitud de mesura, discreción y, en último término, de auténtica posibilidad de eficacia en la gestión de los caudales públicos".

Conviene advertir a este propósito que, según datos de la OCDE, la participación del Estado en la actividad económica es notablemente inferior en España en

comparación con cualquiera de los nueve países de la CEE.

Por otra parte, la "eficacia en la gestión de los caudales públicos" vendrá condicionada no solamente por la cuantía de la participación del Estado, sino fundamentalmente por la racionalidad del gasto público y por el margen de maniobra que la injerencia y las presiones privadas concedan al sector público.

Los problemas de la racionalidad del gasto público se plantean con más vigor cada día, al ser

El alza de los precios no parece tocar a su fin. ¿Cuál es la razón de esta tendencia? Fundamentalmente, que los principales países capitalistas prefieren, desde hace más de un año, las consecuencias de la inflación a las de las que tendrían las medidas destinadas a frenarla.

Antes, cuando la economía se «embalaba» y el alza de los precios rebasaba el umbral del 5 por 100, los Gobiernos frenaban la actividad, imponían una cura de actividad con recesión y paro incluidos. Aquel remedio tendía a acabar con las empresas menos eficaces, obligando a las demás empresas a racionalizar sus estructuras, con lo que se echaban los cimientos de una nueva etapa de crecimiento y pleno empleo.

Este remedio no puede ya aplicarse, por dos razones: La primera es de orden político: debido a la proximidad de las elecciones, los Gobiernos americano, alemán y francés no han podido permitirse el lujo de imponer planes de austeridad. Por otro lado, los intentos de freno de la economía llevados a cabo en Estados Unidos y Gran Bretaña en 1970-71 —intentos abortados—, revelaron una tendencia de fondo muy inquietante: la recesión y el paro —un millón de parados en Gran Bretaña, seis millones en Estados Unidos (cifras de 1971)— no eran ya suficientes para impedir el alza de los precios. Para resultar de alguna eficacia, la «cura» de austeridad habría tenido que

ser más brutal y que superar el plazo de entre doce y quince meses, considerado entonces como máximo.

¿Cuánto tiempo hubiera sido, pues, necesario? Nadie podía fijar un plazo. Los propios consejeros económicos del Gobierno americano, enfrentados a una «estagflación» que desmentía las hipótesis clásicas, terminaron por perder su sangre fría. Una duda se apoderó de los gobernantes: si queremos estabilizar los precios —se preguntaron—, ¿no nos veremos acaso obligados a deprimir la economía hasta tal punto que resultará inútil todo esfuerzo que hagamos luego por relanzarla? Dicho de otro modo: ¿no han entrado las economías capitalistas en una etapa en la que los factores de crecimiento espontáneo ya no actúan, y en la que únicamente la inflación permite asegurar al sistema económico una salud cuando menos aparente?

Abrumados por estas dudas, los Gobiernos renunciaron hace un año a combatir la inflación. ¿Cuánto tiempo podrá continuar ésta al ritmo actual? Nadie sabría decirlo. Lo único seguro es que semejante proceso no puede continuar indefinidamente, y que cuanto más tiempo dure, más perturbará la inflación los intercambios mundiales, más agravará la situación en el Tercer Mundo y más incrementará las tensiones, con lo que se acentuará la crisis del sistema monetario y al mismo tiempo las rivalidades entre Europa y América. ■ M. B.

LA ENFERMEDAD, ACEPTADA

